

Popayán, 30 de noviembre de 2020

**DOCTOR
VICTOR FABIO DE LA TORRE
JUEZ 004 CIVIL MUNICIPAL DE POPAYÁN
E. S. D.**

RADICADO: 190014189002 2020-00058-00
DEMANDANTE: ADRIANA CECILIA MUÑOZ REALPE
DEMANDADO: BERTHA INES NATES ARANCIBIA Y OTROS

ASUNTO: Contestación de demanda

BERTHA INES NATES ARANCIBIA, domiciliada y residentes en Popayán - Cauca, identificada con la cédula de ciudadanía No. 34.317.099 de Popayán, y JAVIER FERNANDO ESCOBAR SALAZAR domiciliado y residentes en Popayán - Cauca, identificado con la cédula de ciudadanía No. 76.330.643 de Popayán, obrando en nuestro propio nombre y representación; respetuosamente procedemos a contestar la demanda propuesta por la señora ADRIANA CECILIA MUÑOZ REALPE, identificada con la cédula de ciudadanía No. 34.553.248 expedida en Popayán Cauca, representada legalmente por su apoderado Dr NORBEY ESCOBAR, identificado con la cédula de ciudadanía No.76.333.514, y con T.P. N° 297442 del CSJ, en el proceso de la referencia, en los términos que a continuación se indican:

FRENTE A LOS HECHOS

Respecto a los hechos enunciados como fundamento fáctico de la demanda en el proceso de referencia, me permitiré hacer los siguientes pronunciamientos:

HECHO PRIMERO: No lo admito, por cuanto a pesar de haber suscrito una letra de cambio por valor de \$2.000.000, la realidad es que la suma real adeudada es por valor de \$1.900.000, puesto que la demandante una vez suscrita la letra, no me entregó el valor total del importe del título, si no que me descontó de entrada la suma de \$100.000, aduciendo que estos los sacaba por concepto de intereses, los cuales aún no se habían causado, si no que causarían al mes siguiente, pero fueron descontados por anticipado, entregándome un capital total de \$1.900.000, sobre los cuales se deben liquidar los intereses de plazo y moratorios.

HECHO SEGUNDO: No lo admito, por cuanto la fecha en que suscribimos el título valor fue el día 29 del mes junio del año 2019, y pactamos como plazo para el pago del capital, la fecha 29 del mes de octubre de 2019 (4 meses), sin embargo, como firmamos el título valor en blanco en cuanto a la fecha del vencimiento del plazo, la acreedora hizo la integración del título a su amaño y colocó como fecha de vencimiento el día 10 de julio de 2019, con el fin de cobrar uno intereses moratorios más elevados. Durante el plazo se le pagaban interés a una tasa del 5% lo cual está muy por encima del interés bancario corriente.

Los intereses cobrados por la acreedora los liquidaba sobre la base de un capital de \$2.000.000 cuando realmente como capital entregó la suma de \$1.900.000.

Además de lo anterior, como se puede observar, la acreedora nos cobraba un valor de \$100.000 mensuales por concepto de intereses, equivalente al 5% mensual, lo cual está por fuera del interés bancario corriente permitido por el art 884 del código de comercio, puesto que revisada la tabla de intereses bancarios corrientes, histórica, emitida por la superintendencia financiera, se puede evidenciar que para las fechas pretendidas o que son objeto de cobro por nuestra acreedora (desde el 29 de julio de 2019), el interés moratorio no superaba el 4.61% y realmente nos cobraba el 5% de interés sobre el capital, además pretendiendo que se le paguen intereses sobre intereses, como lo dejamos claro en la respuesta al hecho tercero, lo que fija estos cobros como ilegales con sus respectivas consecuencias como lo ordena el ordenamiento jurídico.

Artículo 884 del Código de Comercio: Límite de intereses y sanción por exceso. Cuando en los negocios mercantiles haya de pagarse réditos de un capital, sin que se especifique por convenio el interés, éste será el bancario corriente; si las partes no han estipulado el interés moratorio, será equivalente a una y media veces del bancario corriente y en cuanto sobrepase cualquiera de estos montos el acreedor perderá todos los intereses, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 45 de 1990.

Ley 45 de 1990, artículo 72. Sanción por el cobro de intereses en exceso. Cuando se cobren intereses que sobrepasen los límites fijados en la ley o por la autoridad monetaria, el acreedor perderá todos los intereses cobrados en exceso, remuneratorios, moratorios o ambos, según se trate, aumentados en un monto igual. En tales casos, el deudor podrá solicitar la inmediata devolución de las sumas que haya cancelado por concepto de los respectivos intereses, más una suma igual al exceso, a título de sanción.

HECHO TERCERO: No lo admito, por cuanto la acreedora nos hizo firmar un título valor por la suma de \$500.000 por que se le adeudaban 5 meses de intereses a razón de \$100.000 por mes correspondiente al 5% mensual como interés de plazo. Dicha suma corresponde a intereses adeudados, sin embargo, la acreedora hizo firmar solo a Bertha Inés Nates dicho título valor so pena de evitar una acción legal en nuestra contra y ahora pretende que por dichos intereses también se le paguen intereses moratorios, lo cual es totalmente contrario a lo estipulado en el artículo 2235 del código civil el cual dispone expresamente la prohibición de estipular intereses de intereses “anatocismo”.

Como lo he manifestado, la acreedora pretende que se le paguen intereses adeudados en la obligación principal por \$1.900.000 lo cual respalda con un título valor por la suma de “2.000.000”, más intereses sobre intereses adeudados lo cual respalda con el título valor por la suma de \$500.000, que realmente corresponden a intereses y no a capital, como se ha sustentado en la respuesta al hecho segundo del presente escrito.

HECHO CUARTO: No lo admito, por los argumentos expuestos en la contestación de los hechos primero, segundo y tercero de la presente demanda.

HECHO QUINTO: No lo admito, teniendo en cuenta que la acreedora presenta cobro de obligaciones que realmente no se le adeudan o respecto de las cuales se cobran intereses sobre intereses, y por intereses moratorios que exceden los intereses bancarios corrientes liquidados por encima del 1,5% más que el

interés bancario corriente como lo estipula el artículo 884 del Código de Comercio.

HECHO SEXTO: No lo admito por cuanto el capital real de la obligación adeudada es por la suma de \$1.900.000 por las razones expuesta en la contestación a los hechos que anteceden.

HECHO SEPTIMO: No lo admito por cuanto según los argumentos planteados en la contestación de los hechos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, las obligaciones soportadas en los títulos valores no corresponden a obligaciones causadas por sumas reales de capital, si no por el contrario al cobro de un capital por valor de \$1.900.000 y el otro título valor por la suma de \$500.000 correspondería a los intereses que se adeudaban y por los cuales la acreedora nos hizo firmar un título valor, pretendiendo cobrar intereses sobre intereses, actuando de mala fe y en contravía del ordenamiento jurídico colombiano, lo que desvirtúa que la obligación se clara y actualmente exigible.

HECHO OCTAVO: No me consta.

FRENTE A LAS PRETENSIONES

De conformidad con los hechos expuestos solicito muy respetuosamente señor juez no librar mandamiento de pago sobre las siguientes obligaciones ya que las he cumplido parcialmente como se acordó por ambas partes al suscribir el título valor, por lo que me opongo a las pretensiones de la siguiente manera:

PRIMERO: No admito que se libre mandamiento ejecutivo sobre la obligación de \$2.000.000 como capital insoluto de la obligación por cuanto la acreedora nos hizo entrega de la suma de \$1.900.000 por concepto de capital, a pesar de haber suscrito el título valor por mayo valor.

SEGUNDO: No admito que se cobre interés moratorio a la máxima tasa legal permitida por cuanto los intereses cobrados por la acreedora los liquidaba sobre la base de un capital de \$2.000.000 cuando realmente como capital entregó la suma de \$1.900.000

La acreedora nos cobraba un valor de \$100.000 mensuales por concepto de intereses, equivalente el 5% mensual, lo cual está por fuera del interés bancarios corriente permitido por el art 884 del código de comercio, puesto que revisada la tabla de intereses bancarios corrientes, histórica, emitida por la superintendencia financiera, se puede evidenciar que para las fechas pretendidas o que son objeto de cobro por nuestra acreedora (desde el 29 de julio de 2019), el interés moratorio no superaba el 4.61% y realmente nos cobraba el 5% de interese sobre el capital, además pretendiendo que se le paguen intereses sobre intereses, como lo dejamos claro en la respuesta al hecho tercero, lo que fija estos cobros como ilegales con sus respectivas consecuencias como lo ordena el ordenamiento jurídico.

Solicito respetuosamente Sr Juez, se re liquiden los intereses cobrados por la acreedora, a las tasas legalmente permitidas por la Superintendencia Financiera y se apliquen las sanciones de ley a la acreedora, por realizar el cobro de intereses por encima de los intereses bancarios corrientes a que se refiere el artículo 884 del Código de Comercio y el art 72 de la ley 45 de 1990.

TERCERO: No admito que se libre mandamiento de pago por la suma de \$500.000 soportado en un título valor tipo letra de cambio, por cuanto dicha suma de dinero corresponde a intereses adeudados y no a capital. Se le adeudaban 5 meses de intereses a razón de \$100.000 por mes correspondiente al 5% mensual como interés de plazo. Dicha suma corresponde a intereses

adeudados, sin embargo, la acreedora nos hizo firmar dicho título valor so pena de evitar una acción legal en nuestra contra y ahora pretende que por dichos intereses también se le paguen intereses moratorios, lo cual es totalmente contrario a lo estipulado en el artículo 2235 del código civil el cual dispone expresamente la prohibición de estipular intereses de intereses “anatocismo”.

CUARTO: No admito señor Juez, que se libre mandamiento de pago sobre los intereses moratorios que plantea la demandante, soportados en la letra de cambio por la suma de \$500.000, pues como ya lo he manifestado, esta suma corresponde a intereses adeudados por 5 meses sobre el capital de \$2.000.000 de los cuales realmente nos entregó \$1.900.000 y con esta pretensión se busca cobrar intereses, sobre interés lo cual es totalmente contrario a la regulación colombiana en materia de pago de intereses sobre las obligaciones.

QUINTO: No admito la condenación en costas, gastos procesales y agencias en derecho, Sr juez, por cuanto reconozco adeudar la suma de \$1.900.000 por concepto de capital insoluto, respecto de los cuales solicito que se me haga el descuento de la quinta parte que excede el salario mínimo, sobre la remuneración que percibo en relación con el contrato de prestación de servicios N° 2300 del cual soy titular en la Secretaría de agricultura del Departamento del Cauca y respecto del cual se ordenó un embargo a la tesorería del Departamento por la suma de \$ 3.800.000. Manifiesto bajo la gravedad de juramento que no percibo otra remuneración o salario diferente a lo que percibo producto del contrato de prestación de servicios del que actualmente soy titular en calidad de contratista con la Gobernación del Departamento del Cauca, teniendo que sufragar mi manutención y la de mi hijo de nombre JUAN JOSE ESCOBAR NATES y de 18 años de edad, y que actualmente se encuentra estudiando en la universidad. Los gastos que actualmente poseo: \$880.000 por concepto de arrendamiento, \$500.000 por gastos de servicios públicos (agua, luz, gas y servicio de cable), pago de seguridad social por valor de 290.000 (si no pago esto no me pagan los honorarios), más gastos de alimentación y productos de aseo personal y que ascienden mensualmente a: \$1.800.000.

La Corte Constitucional, en la sentencia T-725 de 2014, consideró que las medidas cautelares buscan asegurar el pago de una obligación, pero que deben hacerse efectivas amparando los derechos fundamentales al mínimo vital y la vida digna.

PRUEBAS

Solicito se tengan como pruebas las siguientes:

Documentales:

1. Declaración juramentada donde manifiesto que no percibo otro salario o remuneración diferente al contrato de prestación de servicios N° 2300 de fecha 18 de noviembre de 2020, suscrito con la Gobernación del Departamento del Cauca.

Testimoniales:

Solicito que se recepcionen los testimonios de las personas que relaciono a continuación, los cuales podrán corroborar las afirmaciones realizadas en la contestación de la presente demanda:

- ADRIANA CECILIA MUÑOZ REALPE, identificada con la cédula de ciudadanía No. 34.553.248 expedida en Popayán Cauca.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

- Ley 1564 de 2012.
- Decreto 410 de 1971
- Artículo 884 del Código de Comercio: Límite de intereses y sanción por exceso. Cuando en los negocios mercantiles haya de pagarse réditos de un capital, sin que se especifique por convenio el interés, éste será el bancario corriente; si las partes no han estipulado el interés moratorio, será equivalente a una y media veces del bancario corriente y en cuanto sobrepase cualquiera de estos montos el acreedor perderá todos los intereses, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 45 de 1990.
- Ley 45 de 1990, artículo 72. Sanción por el cobro de intereses en exceso. Cuando se cobren intereses que sobrepasen los límites fijados en la ley o por la autoridad monetaria, el acreedor perderá todos los intereses cobrados en exceso, remuneratorios, moratorios o ambos, según se trate, aumentados en un monto igual. En tales casos, el deudor podrá solicitar la inmediata devolución de las sumas que haya cancelado por concepto de los respectivos intereses, más una suma igual al exceso, a título de sanción.

JURISPRUDENCIA:

La Corte Constitucional, en la sentencia T-725 de 2014, consideró que las medidas cautelares buscan asegurar el pago de una obligación, pero que deben hacerse efectivas amparando los derechos fundamentales al mínimo vital y la vida digna:

“...De esta manera, si bien es cierto que no se debe presumir la afectación al mínimo vital del contratista con ocasión del embargo de sus honorarios, cuando este acredita siquiera sumariamente que esta es su única fuente de ingresos, se debe (i) evitar el embargo total o parcial de dicha acreencia cuando es inferior al salario mínimo legal mensual vigente; (ii) restringir el embargo hasta la quinta parte del monto que excede el salario mínimo, y (iii) permitir el embargo de hasta el cincuenta por ciento (50%) de los honorarios únicamente cuando se busca el pago de deudas contraídas con cooperativas legalmente autorizadas, o para cubrir pensiones alimenticias que se deban de conformidad con los artículos 411 y concordantes del Código Civil...Dando aplicación a esta regla, diferentes Salas de Revisión de esta Corporación han hecho extensiva la protección del salario del trabajador a los honorarios de los contratistas cuando su sostenimiento económico depende directamente del pago de dicha prestación. Así, por ejemplo, en la Sentencia T-309 de 2006 se consideró que el embargo del cien por ciento (100%) de los honorarios de una persona vulneraba su derecho fundamental al mínimo

vital pues de estos dependía su sostenimiento y el de todo su núcleo familiar. A este respecto, señaló:

“Si bien resulta razonable, en abstracto, no hacer extensivas las normas laborales que restringen el porcentaje en que puede ser embargado el salario de un trabajador, al caso del embargo de honorarios que se perciben como retribución de un contrato de prestación de servicios, el juez no puede dejar de lado las circunstancias concretas del asunto sometido a su juicio, so pena de tomar una decisión que resulte desproporcionada y, en consecuencia, lesione los derechos fundamentales de las partes. Esto fue lo que ocurrió en el presente asunto, pues la peticionaria se encontraba, al momento del decreto del embargo del 100% de sus honorarios, como responsable exclusiva de la subsistencia de su núcleo familiar conformado por su esposo y sus dos hijos menores de edad, en tanto su esposo se encontraba desempleado. Entonces, se reitera, no era válido a la luz de los principios constitucionales, embargar la totalidad de los ingresos mensuales con los que contaba una familia para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vestido, educación, servicios públicos domiciliarios, etc. Ello es así, en consideración a que en un Estado Social de Derecho, las autoridades públicas deben propender por la protección de los derechos de los administrados, sin que estos se vean en la necesidad de acudir a la acción de tutela por la vulneración de estos derechos.”

Posteriormente, en la Sentencia T-788 de 2013, la Sala Tercera de Revisión se ocupó del caso de una contratista a la que, por no haber cumplido con la totalidad de sus obligaciones tributarias, sus honorarios le fueron embargados en un proceso administrativo de cobro iniciado por la DIAN. A pesar de constatar que el juez que decretó la medida cautelar respetó las restricciones legales relacionadas, encontró que este no tuvo en cuenta que los honorarios embargados representaban la única fuente de sostenimiento del núcleo familiar de la actora y, por ende, vulneró su derecho fundamental al mínimo vital. Al abordar el caso concreto, señaló lo siguiente:

“Si bien tanto el salario como los honorarios buscan retribuir el trabajo realizado, se diferencian en que el primero se enmarca en una relación contractual en la que existe subordinación y exclusividad, elementos que no se presentan en los segundos; en ese orden, desde una perspectiva lógica estas dos clases de remuneraciones son asimilables para efectos de la aplicación de restricciones al decreto de medidas cautelares, cuando una persona perciba honorarios producto de un único contrato del cual derive su subsistencia y agote la totalidad de su tiempo en el desarrollo de éste, pues las consecuencias del embargo de su fuente de ingresos serían equivalentes a los perjuicios que sufrí[ría] un trabajador si fuera afectado su salario. En resumen, en los eventos en los que se decreta el embargo de honorarios, y estos puedan ser asimilables al salario, el ciudadano afectado puede acudir ante la autoridad pública y colocar de presente su situación, la cual deberá ser atendida y resuelta teniendo en cuenta si la medida cautelar vulnera sus derechos fundamentales, debiéndose limitar o levantar según sea el caso, ya sea aplicando una excepción de inconstitucionalidad, conforme al Artículo 4 superior, o una analogía legal...”

ANEXOS

Con la presente contestación de demanda, anexo:

- Documentos de pruebas documentales.

NOTIFICACIONES

DEMANDANTE: ADRIANA CECILIA MUÑOZ REALPE, identificada con la cédula de ciudadanía No. 34.553.248 expedida en Popayán Cauca, ubicada en la Carrera 27CN # 7-27 B/ Palacé, numero de contacto: 3104010816

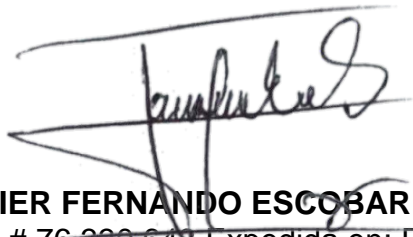
DEMANDADOS: Calle 34AN #10-30 B/ Campobello apartamento 301 de la ciudad de Popayán

Del Señor Juez,

Cordialmente,



BERTHA INES NATES ARANCIBIA
C.C. # 34.317.099 expedida en Popayán



JAVIER FERNANDO ESCOBAR SALAZAR
C.C. # 76.330.643 Expedida en: Popayán